

[Imprimir Página Web](#)

Elecciones anticipadas en Argentina

Pablo Gerchunoff

ARI Nº 32-2002 - 22.7.2002

De no mediar un preocupante agravamiento de la crisis, el próximo 30 de marzo habrá elecciones presidenciales en Argentina. Ante el descrédito generalizado de los políticos, una cuestión importante es conocer a las fuerzas políticas y a los candidatos que se presentan a la contienda. En este sentido, una fecha clave es la del 24 de noviembre, momento en el que los partidos políticos celebrarán elecciones internas para elegir sus candidatos

El proceso electoral

El 2 de julio, el presidente Eduardo Duhalde, elegido por una asamblea legislativa para completar el mandato del renunciante Fernando de la Rúa, anunció que no se quedaría en el poder hasta el 10 de diciembre de 2003, tal y como estaba previsto, y convocó elecciones anticipadas para fines de marzo. El ex vicepresidente de Carlos Menem y ex gobernador de la poderosa provincia de Buenos Aires hizo, de ese modo, una implícita confesión política: recortaba sus ambiciones de perpetuarse en el ejercicio del poder –una ilusión que lo acompañó por apenas un semestre- y se reconocía como un presidente de transición que conduciría al gobierno hasta la normalización institucional. El mismo eligió, a partir de ese momento, una figura identificatoria: la del español Adolfo Suárez. Muchas son las diferencias y pocas las semejanzas entre Duhalde y Suárez, pero hay una posible semejanza que el actual presidente argentino querría evitar: la de desaparecer definitivamente de la escena política pulverizado por los costos de la transición. Si Duhalde ha convocado elecciones anticipadas, lo ha hecho en un intento de evitar que la crisis lo devore. Pretende, al menos, mantener una influencia significativa en su provincia natal.

La decisión de Duhalde no está exenta de riesgos. En un país que se ha tornado imprevisible en la triple dimensión económica, política y social, fechar la entrega del mando el 25 de mayo de 2003 parece un juego con la eternidad. Los principales rasgos de la Argentina de estos días pueden resultar ilustrativos: cuatro años consecutivos de recesión, con un descenso del nivel de actividad estimado en el 13% sólo durante 2002; una tasa de paro del 22% sin la red de contención del seguro de desempleo; una caída de los salarios reales del 30% desde que en enero comenzó a depreciarse la moneda; el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza; millones de ahorristas expropiados por el colapso de un sistema financiero que no puede devolver los depósitos; bancos que ya no son creíbles para intermediar entre el ahorro y la inversión; una moneda que no cumple con su rol como reserva de valor; el Estado y muchas empresas privadas nacionales y extranjeras en cesación de pagos con sus acreedores externos; centenares de miles de contratos rotos o que no se pueden cumplir pese a la voluntad de las partes; franjas heterogéneas de la sociedad movilizadas, en algunos casos para reclamar por la restauración de los derechos de propiedad (los ahorristas), en otros para demandar alimentos o planes ocupacionales de emergencia (los piqueteros), en otros para pedir castigos más severos a los delincuentes comunes. En este contexto se extiende una impugnación colectiva a la clase dirigente y a las organizaciones políticas y un profundo desencanto con los resultados concretos que ha ofrecido el sistema democrático desde su saludado restablecimiento en 1983. Si en Argentina no ha habido un golpe de Estado durante el último año se debe, en buena medida, al rechazo de la comunidad internacional y a que, afortunadamente, los propios militares no están disponibles para la aventura.

En este campo minado hay dos requisitos para que el tránsito hasta las elecciones anticipadas no sufra perturbaciones que terminen frustrándolo. El primero, encontrar un mínimo de calma económica para evitar que los comicios se desarrollen en medio de una dinámica caótica; el segundo, dirimir la lucha interna por el liderazgo justicialista y por su candidatura presidencial, ya que es el Partido Justicialista el que más probabilidades tiene de ganar las elecciones después del fracaso de la Alianza en su gestión de gobierno y de su fragmentación como colectividad política. El requisito económico tiene una cara modesta y otra ambiciosa. La modesta implica que Duhalde ha renunciado al sueño transformador de construir en menos de un año una nueva organización económica que deje atrás la quiebra de la anterior. La ambiciosa es evitar la hiperinflación en medio de una generalizada desconfianza del peso. Para ello será necesario algún acuerdo mínimo con el FMI que incluya la resolución de la crisis financiera y detenga la consecuente hemorragia monetaria. Arreglar esta cuestión es una necesidad para el futuro presidente: sería una pesada carga para él (ella) afrontar lo que hasta ahora Duhalde no hizo frente, esto es, sincerar la pérdida patrimonial de los ahorristas.

En cuanto al requisito político, Duhalde –empujado por gobernadores y legisladores de su partido- ya avanzó. Enancado en la demanda social por una reforma integral de las prácticas partidarias, el presidente aceptó de sus pares la fórmula para acabar con la parálisis decisoria del justicialismo, convertido desde 1999 en una liga de gobernadores y de caciques parroquiales y sindicales sin liderazgo nacional. El Congreso aprobó una ley que obliga a los partidos políticos a seleccionar a sus candidatos en elecciones primarias simultáneas y abiertas que se celebrarán a fines de noviembre. Para la mayor parte del arco político argentino, esta ley es una imposición discutible: ¿por qué los comicios primarios abiertos deben ser obligatorios para asociaciones civiles formadas alrededor de un principio de cohesión ideológica?; y, en todo caso ¿pueden los ciudadanos independientes torcer con su participación el rumbo trazado por los aparatos partidarios? Acertada o equivocada en el ámbito de los principios

abstractos, la ley pretende ser una solución para el dividido Partido Justicialista, que quizás de este modo tenga un candidato a la presidencia aceptado por todos. Para cerrar el círculo, la ley tiene una cláusula cerrojo: aquellos aspirantes que se presenten a las elecciones primarias dentro de un partido no se podrán presentar a las elecciones generales fuera de él. En otras palabras, no hay lugar para el doble juego.

¿Un partido de gobierno?

Si el partido justicialista termina de resolver sus conflictos internos, pondrá sobre la mesa de la campaña electoral su temperamento y su vocación de gobierno e intentará infundirle nuevos aires a la coalición popular conservadora que buenos frutos le dio durante los años noventa, bajo la administración de Carlos Menem. El programa, en sus grandes trazos, está dado: reorganización económica sobre fundamentos capitalistas; reconstrucción de las instituciones monetarias, financieras y fiscales; reconciliación con la comunidad internacional; reactivación económica liderada por las exportaciones; reforma política y una amplia red de contención social gestionada en conjunto con organizaciones no gubernamentales de reconocida transparencia. Tratándose de una fuerza política con un piso electoral no menor del 30%, el justicialismo no es un partido hegemónico, al estilo del PRI mexicano de otras épocas, pero sí un partido predominante que sólo ocasionalmente es derrotado en los comicios. Muchas veces, esa fuerza lo ha premiado con otra: la de contar con la paciencia de los sectores más sumergidos de la sociedad, que constituye a la vez su base más leal. ¿Se repetirá la paciencia esta vez? Le va a hacer más falta que nunca desde que apareció en la escena política de 1945: el desempleo se va a reducir lentamente y, por lo tanto, la pobreza se mantendrá en niveles altos. El justicialismo está, pues, ante una prueba de fuego. Debe ganar las elecciones dando testimonio de que la crisis no lo ha lastimado su capacidad de gestión política y luego debe terminar con la crisis.

¿Quién será el candidato del justicialismo? Antes que nadie, se ha anotado en la carrera el propio Menem. El ex-presidente exhibe un balance político con un resultado a priori negativo. Por un lado, encarna el éxito en la lucha contra los episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1990 y las audaces reformas de mercado que abrazó sin vacilar dejando atrás su pasado populista. Por el otro, carga con el hecho de ser uno de los dos hombres públicos (el otro es Fernando de la Rúa) con peor imagen en una sociedad que lo hace co-responsable del colapso actual. Menem se ha convertido en el símbolo de las prácticas corruptas que gran parte de la sociedad atribuye a la clase política y el causante principal del crecimiento descontrolado de la deuda pública. Aún consciente de estas desventajas, a Menem le cuesta renunciar a su ambicioso proyecto personal: ser el primer argentino que, habiendo completado dos mandatos presidenciales, inicie, a los 73 años, un tercero. Tiene alguna probabilidad de conseguirlo si los cuantiosos fondos que destinará a la campaña electoral encuentran un caldo de cultivo propicio para sus intereses: la prolongación de la crisis económica, del proceso inflacionario y de la violencia social. En tal caso, la estabilidad económica y la seguridad personal se transformarían en las demandas casi excluyentes de la sociedad y muchos argentinos en estado de pánico reclamarían un "piloto de tormentas" que, si hace falta, no repare en apelar a métodos autoritarios para restablecer el orden. Así pues, cuanto peor le vaya al país en los próximos meses, mejor le irá electoralmente a Menem. No son las propuestas de dolarización, alineamiento incondicional a Estados Unidos, regionalización del país y eliminación del Senado las que acercarán a Menem al electorado. Será el miedo.

Las debilidades políticas de Menem y la ansiedad de su más importante adversario interno, el presidente Duhalde, por cerrarle el paso, abrió el cauce para el surgimiento de nuevas candidaturas provenientes de la corriente central del justicialismo. Hace un mes pareció que el competidor de Menem sería Carlos Reutemann, gobernador de Santa Fe, al que las tempranas encuestas situaban en una posición inmejorable tanto en los comicios internos de noviembre como en las elecciones generales de marzo. Pero, temeroso de quedar atrapado sin poder propio en los salvajes conflictos del partido, Reutemann se apartó de la contienda y dejó un vacío que terminó por llenar José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, la tercera provincia del país en población y nivel de actividad económica. Considerando el clima antipolítico que se ha extendido por la sociedad argentina, el paso al costado de Reutemann y el ingreso en escena de De la Sota fueron una buena noticia para Menem. Reutemann no es un político tradicional –más bien desconfía de los políticos–, carece de una maquinaria electoral propia, no se expresa con la retórica de la profesión y ha sido un gobernador austero y eficiente. En muchos aspectos, De la Sota es su contracara: pertenece al riñón del justicialismo, ha construido un aparato político territorial, hace gala de una retórica florida y administra una provincia quebrada. Su única ventaja es que tiene menos pruritos en recostarse sobre el poder de Buenos Aires. Pero esa ventaja viene con un problema: los intendentes de la más poderosa provincia del país y aún el propio Duhalde dudan en brindarle el apoyo explícito que sí le hubieran brindado a Reutemann.

El desafío (I): desde el populismo a la izquierda

¿Quién puede competir con el justicialismo en las elecciones del próximo marzo? Habrá un mosaico multicolor de postulantes que querrán convertir la crisis en una oportunidad política. Uno de ellos proviene del propio justicialismo, pero está casi convencido de que le conviene evitar las elecciones primarias abiertas de su partido y desafiarlo desde afuera. Se trata de Adolfo Rodríguez Saá, quien intenta convertirse en la impugnación del justicialismo al actual sistema económico y político. Rodríguez Saá es el continuador de un linaje familiar de orientación conservadora que desde 1860 se ha turnado en la conducción política de la provincia de San Luis. Su abuelo fue gobernador entre 1902 y 1908; él ocupó el mismo cargo desde la restauración de la democracia, en 1983, hasta su efímero paso de una semana por la presidencia de la Nación, entre la renuncia de Fernando de la Rúa y el golpe de palacio que lo arrojó de la Casa Rosada para instalar allí a Duhalde. Durante su largo paso por la gobernación ejerció el poder con estilo paternalista y cuasi-feudal y con una poco frecuente pulcritud fiscal. Durante su corto tránsito por la presidencia prometió sin mayores fundamentos la creación de dos millones de puestos de trabajo en un mes y un incremento en los haberes jubilatorios. Pronto descubrió que la combinación de su gestión provincial y

sus promesas nacionales era políticamente redituable, al menos por lo que decían las encuestas. El espacio tradicional del populismo ha encontrado en Rodríguez Saá a un impensado protagonista. Seguramente, ello no le alcanzará para volver a la presidencia por la vía del voto, pero sí para negociar después de las elecciones con sus antiguos compañeros desde una posición de fuerza.

Quien puede todavía alimentar alguna esperanza de victoria en las elecciones nacionales de marzo es Elisa Carrió, la indiscutida líder de una fuerza política nueva: la Alternativa para una República de Iguales (ARI). Carrió proviene del radicalismo y, de hecho, nunca presentó la renuncia formal a su afiliación al viejo partido. Sin embargo, nadie como ella se ha beneficiado de la diáspora y el desaliento que provocó en sus filas y en las del FREPASO la desgraciada experiencia de gobierno de De la Rúa. Heredera del discurso aliancista contra la corrupción y por la transparencia de las prácticas políticas, ha agregado ahora una vena crítica a la organización económica nacida durante los años noventa. De todas maneras, esa crítica es oscilante. Por momentos se limita a exigir un capitalismo más transparente y más equitativo, pero manteniendo la defensa de la propiedad privada de los medios de producción. Cuando percibe el crecimiento electoral de posiciones más combativas, se pliega a un discurso de raíz jacobina cuyo mejor expositor es el diputado izquierdista Luis Zamora: la nueva política y la nueva economía nacerán de una revolución desde abajo, en las asambleas barriales y en las movilizaciones piqueteras.

He aquí la disyuntiva: Carrió –que frecuentemente busca una identificación con Lula ante el electorado- debe elegir entre la construcción de una fuerza de centro- izquierda que asuma los problemas de gobierno (como lo hará Rodolfo Terragno desde lo que quede de la Unión Cívica Radical), o la participación en un arco contestatario que suele subestimar la competencia política bajo las reglas de la democracia representativa. Si, pese a su nula experiencia de gestión, elige lo primero, contará con el apoyo de algunas franjas del justicialismo (como el gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner) y podrá confrontar con mayores probabilidades con De la Sota o –como prefiere- con Menem. Si elige lo segundo, acentuará un perfil radicalizado. En el límite, quizás concrete su amenaza reiterada: “abstención revolucionaria” si las reformas políticas en curso no incluyen una inconstitucional renovación inmediata y simultánea de todos los cargos electivos.

El desafío (II): la renovación del centro-derecha

El llamamiento a elecciones anticipadas ha sido un duro golpe para todas las fuerzas políticas en formación, pero especialmente para las de centro-derecha. La precipitada decisión de Domingo Cavallo de participar en el gobierno de la Alianza compartiendo su colapso dejó un vacío. No hace falta construir una hipótesis contrafactual muy sofisticada para concluir que Cavallo estaría hoy en una posición privilegiada si no hubiera optado por ese desafortunado atajo para volver al poder después de su gestión como ministro de economía en las mejores épocas de Menem. Los esfuerzos de Ricardo López Murphy, Patricia Bullrich y Mauricio Macri por llenar ese vacío parecen destinados a fracasar. López Murphy, ex afiliado radical y economista de ideas ortodoxas que fue ministro de Economía de De la Rúa por apenas dos semanas, tiene equipos técnicos pero una estructura política ínfima para progresar con su candidatura. Quizá, si hubiera seguido el camino de Carrió manteniendo su ficha en el partido pero preservando la independencia de su discurso, hoy estaría a la ofensiva frente a los dirigentes que impulsaron su destitución. En cuanto a Bullrich y Macri, sus recursos políticos son similares a los de López Murphy: sobrepoblación de técnicos y estructura política sumamente débil, sin inserción territorial fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Bullrich, ministra de trabajo de De la Rúa pero no afiliada radical, persevera todavía en la lucha por edificar una candidatura presidencial. Macri, presidente de Boca Juniors, el club de fútbol más popular del país, ha desistido y ahora aspira a la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo del justicialismo.

La perspectiva española

La crisis argentina redujo el valor de las empresas españolas que invirtieron en el país. El llamamiento a elecciones anticipadas puede tener un efecto benéfico. Hay dos razones para ello. La primera es que los candidatos con más probabilidades de triunfar en los comicios tienen interés en normalizar las relaciones con los inversores y acreedores en general y con España en particular. En De la Sota o Menem esa voluntad es transparente. En Carrió en su versión socialdemócrata, persistirá la búsqueda de una reformulación de contratos con las empresas privatizadas y de algún “castigo ejemplificador” si encuentra un caso robusto de violación de la ley. La segunda razón para esperar una mejoría es la siguiente: ningún candidato en carrera querrá iniciar su gestión aumentando las tarifas de los servicios públicos o manteniendo irresuelta la crisis financiera. Pedirán, pues, a Duhalde, que resuelva estos problemas antes de la transferencia del mando. La moraleja es simple: las elecciones anticipadas pueden anticipar las soluciones.

Pablo Gerchunoff

Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires (Argentina)

El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos es una fundación privada e independiente cuya tarea es servir de foro de análisis y discusión sobre la actualidad internacional, y muy particularmente sobre las relaciones internacionales de España. El Real Instituto Elcano no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los documentos firmados por sus analistas o colaboradores y difundidos en su página web o en cualquier otra publicación.

Subir ▲